

## CRISIS Y CONSUMISMO

David Ibarra  
8 de enero de 2009  
El Universal

Las políticas fiscales de corte keynesiano de administración de la demanda para sostener desarrollo y empleo, fueron reemplazadas desde los años setenta por políticas neoliberales centradas casi exclusivamente en el manejo monetario. Así se produce un cambio extraordinario en la concepción y encauzamiento de las políticas públicas.

Al Estado se le postula no como el proveedor de soluciones a los problemas de la vida económica y social, sino como la fuente y raíz de los mismos. Ello justifica liberar de trabas a los mercados, cuyos mecanismos invariablemente eficientes, llevan a economía y sociedad por sendas automáticas de desarrollo sin inflación. Así se justifica en lo externo, la supresión de las fronteras económicas y la creación de un sistema global de mercados, donde mercaderías y capitales gozan de plena libertad de movimiento. Y en lo interno, se emprende la privatización de empresas públicas, la desregulación de los mercados -singularmente los financieros-, la reducción de los impuestos directos a los grupos pudientes, el otorgamiento de independencia a los bancos centrales, mientras se limita más y más el gasto gubernamental en la búsqueda del presupuesto equilibrado.

De esa manera, el sustento y mejora del bienestar macroeconómico para todos quedó fincando, no en las acciones del Estado, sino en mercados, supuestamente capaces de absorber cualquier impacto imprevisto, auxiliados cuando más por políticas monetarias espurgadas de casi toda influencia política o gubernamental. Hay manifiesta desconfianza neoliberal en los políticos y los gobiernos, por considerarlos proclives a permutar el bien colectivo por ventajas electorales o beneficios transitorios. En cambio, hay confianza plena en los

planteamientos financieros conservadores sintetizadas en la “hipótesis de los mercados eficientes”. Tal hipótesis sostiene que los mercados financieros aportan siempre información suficiente y se equilibran automáticamente, haciendo casi imposible la aparición de desequilibrios graves o persistentes.

Tales afirmaciones teórico-ideológicas contradicen flagrantemente la historia de la inestabilidad de los mercados financieros en sus ciclos repetitivos de auge y depresión manifiestos desde la crisis de los tulipanes en el siglo XVII hasta la debacle contemporánea, y que siempre han requerido de la intervención estatal para suavizar sus peores efectos.

Aun así, el núcleo central del manejo económico se ha desplazado de los gobiernos y ministerios hacendarios a los bancos centrales. En lugar del gasto público y los impuestos -con el fin de amortiguar o suprimir los efectos de las recesiones económicas-, la herramienta macroeconómica fundamental, se centra en la manipulación de las tasas de interés y en menor escala a los tipos de cambio. La tarea de administrar la demanda macroeconómica se delega primordialmente a los bancos centrales. En efecto, salvo en periodos de recesión cuando la tasa de interés pierde su capacidad de revitalizar la actividad económica -como ocurre hoy en día-, los bancos centrales suelen reducir o elevar dichas tasas, sea para evitar sobre todo los riesgos de la contracción de la demanda.

El resultado se traduce en aliento al gasto en sustitución del gasto público o la manipulación de los impuestos, cada vez que aparecen signos de recesión. Y como el mayor peso macroeconómico corresponde al consumo de las familias -entre el 60% y el 70% del producto-, los esfuerzos combinados de banca y gobiernos fomentan el consumismo y el endeudamiento privados, como vía de sostener y estabilizar los ritmos de actividad económica.

En apariencia, la estafeta del control de la economía se despolitiza, dejando en el control a bancos centrales independientes y de manga ancha. De la

misma manera, los gobiernos se endeudan menos, atendiendo a razones económicas, mientras las empresas y las familias llevan sobre sus hombros la doble carga de mantener la estabilidad monetaria y a la vez asumir la espiral de préstamos excesivos. Por eso, se ha desplomado el ahorro de las familias de muchos países industrializados, singularmente en los Estados Unidos, mientras se fomenta un consumismo desenfrenado hasta complicar enormemente la solución de la crisis financiera actual.

En México, la situación es algo distinta, pero no mejor. La banca nacional se ha especializado en otorgar crédito a las compras y viajes de las familias, alentando patrones de consumo insostenibles en un país pobre. El financiamiento de la producción se ha dejado a cargo de instituciones del exterior que en alto grado han cerrado la llave a las empresas nacionales más importantes ante la crisis de los mercados internacionales de capitales. El endeudamiento externo del Estado disminuye, mientras el empresarial aumenta; representa ya el 50% del total nacional con riesgo de inducir la desestabilización cambiaria frente a la inevitable acumulación de vencimientos, la dificultad de renovar los créditos foráneos y la presencia de déficit crecientes en la balanza de pagos. Al propio tiempo, las primeras manifestaciones del receso del consumo, elevan peligrosamente el ritmo de crecimiento de las deudas vencidas de las tarjetas de crédito y de los préstamos inmobiliarios de la banca comercial, induciéndola a restringir más y más sus financiamientos. En consecuencia, se acentúa el riesgo de que la economía nacional no sólo carezca de acceso a los créditos a la producción, sino también al consumo, en circunstancias contraccionistas del empleo y de los ingresos del grueso de la población.

El país necesita de un sólido programa y de una ley de emergencia, centrados en tres cuestiones esenciales. Enmendar las deficiencias de nuestro sistema financiero que no presta a la producción y lo hacen, por tanto, indiferente a la generación de empleos y a cerrar los agudos desequilibrios del comercio

exterior. Proteger a la economía popular no con emplastos demagógicos o electoreros, sino con el impulso a medidas largamente aplazadas: servicios universales de salud, accesos ampliados a la educación en todos sus niveles, creación de seguros compensatorios del desempleo, inversión estatal masiva y de ejecución inmediata en obras públicas (regeneración de distritos de riego, caminos, infraestructura escolar, etc.). Romper los prejuicios ideológicos en torno a la intervención estatal, sea en materia de programación, regulación y política industrial, de idear y preparar proyectos de inversión o de creer en la santidad del mercado y del presupuesto equilibrado en tiempos de crisis. Los países industrializados y muchos emergentes ya están inmersos en políticas francamente keynesianas. Así lo demuestran los rescates estatales de los sectores financiero y automotriz o las ayudas a las familias sobreendeudadas en los Estados Unidos.